

H EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U.
Presidenta Editora: Pilar de Yarza Mompeón
Vicepresidente: Fernando de Yarza Mompeón
Director General: José Manuel Lozano Orús

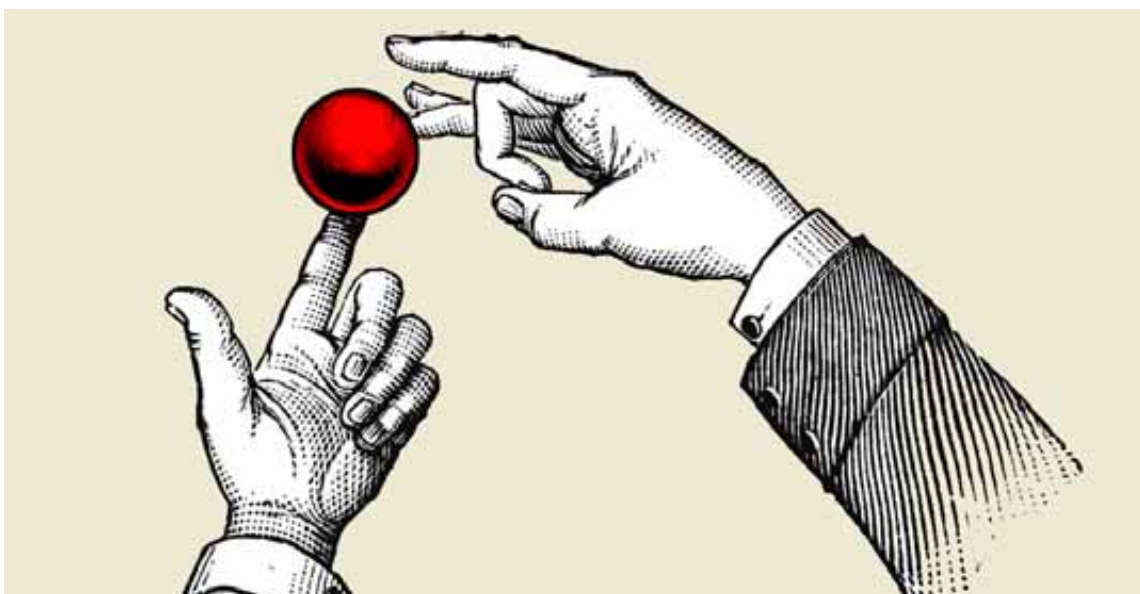
Director: Miguel Iturbe Mach
 Subdirectores: Encarna Samitier (Opinión), Ángel Gorri (Información). Redactores Jefe: Enrique Mored (Aragón), Santiago Mendive. Jefe de Política: José Luis Valero. España,

Mundo y Economía: José Javier Rueda. Deportes: José Miguel Tafalla. Cultura: Santiago Paniagua. Internet: Esperanza Pamplona. Cierre: Mariano Gállego.

Gerente: José Andrés Nalda Mejino
Comercializa: Metha. Gestión & Medios, S. L.
Imprime: Impresa Norte, S. L.
Distribuye: DASA. Distribuidora de Aragón, S. L.

LA FIRMA | El Gobierno ha tenido que revisar, para peor, sus previsiones macroeconómicas, pero ha conseguido alargar los plazos del ajuste fiscal, lo que, en cambio, puede implicar una aceleración de las reformas estructurales
 Por José Antonio Biescas Ferrer y Javier Franco Enguita, economistas

El nuevo Programa de Estabilidad



VITICOR

EL descenso en un 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) registrado en 2012 –según las cifras publicadas por el INE el pasado 28 de febrero– pone de manifiesto que la economía española se encuentra inmersa en un segundo proceso recesivo. Por otra parte, la actualización del Programa de Estabilidad –aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de abril junto al nuevo Programa Nacional de Reformas– prevé para el conjunto de este año otro descenso del PIB similar (-1,3%) al del anterior y un crecimiento económico positivo pero modesto (0,5%) para 2014, con lo que habrá que esperar al ejercicio siguiente para que ocurriera algo parecido en el empleo.

La nueva serie de prospectiva gubernamental ha tenido que corregir a la baja de forma muy sustancial los datos contenidos tanto en el anterior Programa de Estabilidad, publicado en abril del pasado año, como en el escenario macroeconómico que acompañaba a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del actual ejercicio. La realidad es tozuda y el Gobierno finalmente ha tenido que aproximar sus previsiones a lo que ya hace más de seis meses esperaban la inmensa mayoría de los analistas de coyuntura e instituciones como el FMI y la Comisión Europea, cuando además estas últimas esperan ahora una evolución todavía más negativa a la luz de sus publicaciones más recientes.

La información disponible deja claro que también la economía aragonesa ha vuelto a entrar en recesión, con una Contabilidad Regional de España del INE –publicada el 21 de marzo– que estima el descenso del PIB en el ejercicio 2012 en un 1,5%. Por otra parte, las previsiones respecto a 2013 del Ejecutivo regional (que en el caso del PIB

se mantenía hasta el momento en un -0,7%) es de esperar que sean próximamente revisadas a la baja, a la luz de la actualización de los pronósticos españoles realizados por el Gobierno nacional que le suelen servir como referencia.

El cuadro de previsiones de déficit contenido en el Programa de Estabilidad se ha visto asimismo modificado, elevándose para 2013 hasta el 6,3% del PIB (desde el 4,5% fijado en los PGE) y retrasando dos años –hasta 2016– el cumplimiento del objetivo de que el déficit conjunto de las administraciones públicas españolas se sitúe por debajo del 3% del PIB.

Al elevar el objetivo de déficit para 2013, el Gobierno nacional se ha curado en salud, e implícitamente se reconoce que el ejercicio de prospectiva realizado con motivo de los PGE de este año y que sirve de base para la estimación de los ingresos y gastos públicos estaba equivocado y era demasiado optimista. La parte más positiva consiste en que renuncia a subsanar sus errores de previsión –a los que ya nos van acostumbrando– con un esfuerzo adicional de consolidación fiscal, teniendo en cuenta que op-

tar por ello además de tener impacto social también tendría efectos negativos –multiplicadores– en el crecimiento económico, en el empleo y el paro.

Bruselas parece ser ahora menos ortodoxa con los objetivos de austeridad –algo no ajeno a la actual nueva recesión–, pero la relajación de los planes de consolidación fiscal puede tener contrapartidas muy exigentes en términos de reformas estructurales a la vista de las declaraciones que ha avanzado la Comisión y de los procesos negociadores llevados a cabo en los últimos años.

El nuevo reparto del déficit para 2013 queda en un 3,7% para la Administración central, un 1,4% para la Seguridad Social, un 1,2% para las comunidades autónomas y un déficit nulo en el caso de las corporaciones locales. El principal beneficiado de este cambio es la Seguridad Social (que en los PGE tenía previsto el equilibrio presupuestario), seguida a continuación por las autonomías (cuyo objetivo anterior era de siete décimas de punto), mientras que se priva de dicho beneficio a las corporaciones locales.

Ese mayor margen y cómo se imputa a las comunidades es un tema de debate actualmente. Hasta ahora en el Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre se ha planteado un objetivo homogéneo para todas ellas y, de cambiarse el planteamiento, habría que ver seriamente tanto su justificación –ya que abriría la puerta a la existencia futura de criterios heterogéneos– como los criterios objetivos a utilizar, que en el caso de llevarse a cabo deberían contener –más allá de los meramente políticos– el esfuerzo de consolidación fiscal realizado hasta la fecha y las dificultades –caso de la evolución actual del PIB o la tasa de paro– a afrontar.

«En caso de no exigirse un déficit homogéneo a todas las comunidades, habría que ver seriamente tanto su justificación como los criterios objetivos a utilizar»

HOY, JUEVES 30

Ángel Gorri

‘IMPULSO’

EL plan de empleo que la presidenta Rudi anunció como reacción al «disgusto» de los 144.000 parados cambia ahora hasta de título: ‘Plan Impulso’. Llamativa metamorfosis por la que los 150 millones que se iban a destinar a incentivos empresariales y al empleo se quedan en algo más de la mitad. La cifra inicial se alcanza con otras partidas que, al igual que las anteriores, vienen a parchear los agujeros que los recortes han ido creando en la malla de protección social. Basta ver que el programa mejor dotado aparece en ese apartado ‘Social’: 20 millones en mejoras sanitarias, necesarias pero para las que nadie prevé crear empleo. O esa línea de subvenciones a la inversión en la industria agroalimentaria a la que ahora se van a destinar 18 millones, cuando tiene un tapón de peticiones no atendidas por valor de 200. Entre unas cosas y otras, al final quedan diez millones para incentivar la contratación. En cualquier caso, bienvenido sea el plan y la inyección de circulante que supone, aunque todavía queda esperar a que Rajoy nos libre del castigo del déficit a la carta. O que Rudi se plante y lo incumpla para liberar los recursos que hagan posible este improvisado ‘Impulso’, en realidad una autoenmienda al presupuesto con su sumatorio de carencias y renunciadas en origen.

CON DNI

Víctor Orcástegui

Escaños con café y copa

LOS españoles de ahora mismo estamos más que dispuestos a encresparnos ante cualquier cosa que puedan hacer o decir los políticos, a los que tenemos permanentemente puestos en el punto de mira de la cólera, sea justa o injusta. A fin de cuentas, nos lo recomendó un francés, Monsieur Hessel, así que nos lo hemos tomado muy a pecho. Pero hay que renocer, por otra parte, que la actividad y la actualidad políticas ofrecen continuamente en España materia, si no siempre para la ira, al menos para el estupor. Uno de los penúltimos berrinches nos lo hemos llevado a causa de las cafeterías y restaurantes –al parecer hay tres– del Congreso de los Diputados, con su lista de precios subvencionados para comidas y bebidas. Cuesta aceptar que, mientras se recorta el presupuesto en tantos capítulos necesarios, el baqueado contribuyente tenga que poner dinero para que los diputados, que están muy lejos de ser menesterosos, coman y beban más barato. El presiden-

te de la Cámara, Jesús Posada, del PP, ha pedido que no se saquen las cosas de quicio y se ha recordado que los precios protegidos benefician también a los trabajadores de la institución; e igualmente, hay que suponer, a los numerosos periodistas que frecuentan las sesiones. Y vista en detalle la lista de precios, el chollo que el Congreso ofrece a sus señorías quizá no sea tampoco tan exagerado como se desprende de esos 3,45 euros por un gintónico, con ginebra corriente, que se han convertido en piedra de escándalo. Pero así y todo, tal como está el panorama, resulta inevitable que los ciudadanos cataloguen el caso como uno más de esos injustificados privilegios que se achacan a los políticos y en los que nunca entra la tijera. En cualquier caso –y habrá que darle en esto la razón al diputado Alfred Bosch, aunque sea de la Esquerra–, no es lo mismo subvencionar cortados, platos del día o bocadillos, que pagar ‘whiskies’ y lingotazos a quienes se supone que están allí trabajando; y, si no lo hacen, deberían al menos disimular. A muchos españoles tal vez no nos importaría demasiado sufragarles a los diputados un café de vez en cuando, aunque solo sea para que no seesten tan descaradamente en el escaño. Pero para las copas, por favor, que salgan a la calle y se las paguen a pelo.

vorcastegui@heraldo.es